

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
DISTRITO JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA
CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE BUGA**

FECHA _____
AÑO INICIACION PROCESO **2012**
NÚMERO DE RADICACIÓN: _____
MEDIO DE CONTROL: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

ACTOR: **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**
CEDULA DE CIUDADANIA: **5.762.505 DE SOCORRO**
DIRECCION: **CALLE 71 B NO. 93-34**
TELEFONO: **6069491**

DEMANDADO **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**
NIT
DIRECCIÓN: **Cra. 10 N° 27-27 Edificio Bachué**

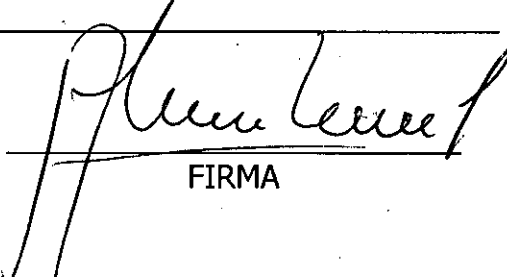
ENVIO A USTED Y POR **1** VEZ, EL PROCESO DE LA REFERENCIA, QUE CONSTA DE **4** CUADERNOS, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 41

APELACION SENTENCIA _____ AUTO _____ CONSULTA _____
CONTRA LA PROVIDENCIA _____ FECHA _____ QUE OBRA DE _____ FOLIOS

APODERADO DEL ACTOR: **ALVARO RUEDA CELIS**
CEDULA DE CIUDADANIA: **79.110.245 de Bogotá**
DIRECCIÓN: **CALLE 73 BIS No. 26-28 BOGOTÁ**

APODERADO DEL DEMANDADO: _____
CC N° _____
DIRECCIÓN: _____

CORDIALMENTE,


FIRMA

Señor Juez

DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE DEL VALLE DEL CAUCA
CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE DE BUGA
E S D.

GUSTAVO TORRES BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía **5762505**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá DC, en calidad de titular de asignación de retiro reconocida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por este memorial me dirijo a su despacho, manifestando que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **ALVARO RUEDA CELIS**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.110.245, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 170560 del Honorable Consejo Superior Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación el proceso contencioso administrativo de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL), representada por su Director Señor, Mayor General RODOLFO TORRADO QUINTERO o quien haga sus veces, a fin de que con el cumplimiento de los trámites previstos en el proceso ordinario contencioso administrativo se declare la nulidad del acto administrativo oficio **Nº 47324 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009**, expedido por la Caja de retiro de las Fuerzas Militares, por el cual se me negó la reliquidación de mi asignación de retiro y Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordénese: la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el incremento en que fue aumentada la asignación de retiro, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor IPC que se aplicó para los reajustes pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que dispone el incremento anual de las pensiones, en un porcentaje igual al IPC del año anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en las Leyes 238 de 1995 y 100 de 1993 artículo 14, tal como se indicará y fundamentará en el texto de la demanda. Igualmente para que se paguen indexados los dineros adeudados por los conceptos anteriores e intereses que se originen; así como el pago de gastos procesales y agencias en derecho que conlleve adelantar este proceso.

El doctor **ALVARO RUEDA CELIS**, además de lo previsto en el artículo 70 del CPC, esta facultado para demandar, allegar pruebas, interponer recursos, recibir, transigir, sustituir, tutelar, renunciar, conciliar y reasumir las actuaciones que sean necesarias para asumir la defensa de mis intereses suscitados dentro del proceso. Así mismo queda facultado para gestionar ante la demandada el cumplimiento de la sentencia que le ponga fin al proceso.

Sirvanse Honorables Magistrados, reconocerle personería jurídica al doctor RUEDA CELIS, en los términos y para los fines señalados en el presente poder.

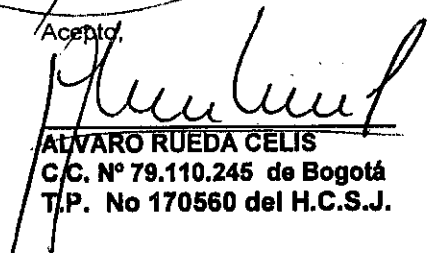
Respetuosamente,


GUSTAVO TORRES BETANCOURT
C.C. Nº 5762505

FIRMA QUE SE AUTENTICA

NOTARIA SESENTA Y SIETE (67)

Acepto,


ALVARO RUEDA CELIS
C.C. Nº 79.110.245 de Bogotá
T.P. No 170560 del H.C.S.J.



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

La suscrita Notaria certifica que este escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por:

TORRES BETANCOURT GUSTAVO

con: C.C. 5762505 y T.P.

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto.

Bogotá D.C. 18/10/2011 a las 10:09:11 a.m.

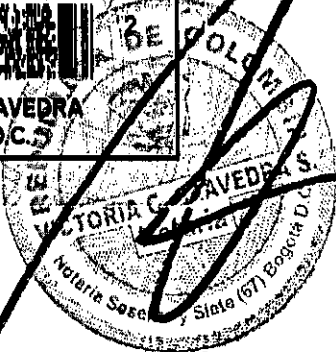
5gtr5c54b4erc44



[Signature]
FIRMA



VICTORIA C. SAAVEDRA SAAVEDRA
NOTARIA 67 BOGOTÁ D.C.



RAMA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL

Bogotá, D.C. Coordinación

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO JUDICIAL PARA LOS
JUECES ADMINISTRATIVOS DEL CONCIPIO DE BOGOTÁ
EXCMO. SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CONCIPIO DE BOGOTÁ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PERSONAL "ANE 84 CPO"

El presente documento es el resultado de la diligencia realizada por

Alvaro Rueda Celis

Código de Identificación: 79110245 Bta

Fecha de Emisión: 170560

BOGOTÁ, D.C. 28

NO DE RAD. REGISTRADO: 2011

Asesoría Jurídica

[Signature]

2 23
41

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.762.505
TORRES BETANCOURT

APPELLIDS GUSTAVO

[Signature]

[Portrait Photo]

FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1947
BELEN DE UMBRIA
(RISARALDA)

1.68 A+ M

23-JUN-1959 SOCORRO

REGISTRACION NACIONAL

[Barcode]

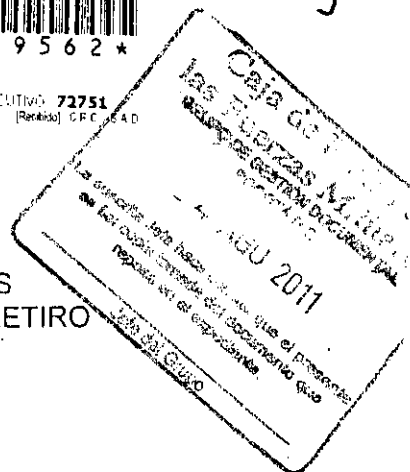
A-1500-100-0001-01-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00

**CAJA DE RETIRO
DE LAS FFMM**ASUNTO
DEST
DEPEND
FOLIOSDERECHO DE PETICION
CIELO TORO GONZALEZ
RECONOCIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES
3 No COMUNICACION

79110245

CONSECUTIVO 72751
(Retiro) C.F.C. 0540

Señor Mayor General
RODOLFO TORRADO QUINTERO
 Director General Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
 E. S. D.



REFERENCIA : DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 CN Y 5 CCA. SS
 RELIQUIDACIÓN Y REAJUSTE DE ASIGNACIÓN RETIRO

ACTOR : GUSTAVO TORRES BETANCOURT
 Reliquidación asignación de retiro IPC

Yo, ALVARO RUEDA CELIS, en mi calidad de apoderado del ACTOR EN REFERENCIA, con cedula de ciudadanía N° 5.762.505 según consta en el poder que anexo, elevo ante usted las siguientes peticiones:

PETICIONES

1. Se ordene a quien corresponda la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro del actor, reconocida mediante Resolución expedida por dicha entidad, adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el porcentaje en que fue aumentada la pensión, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor IPC que se aplicó para los reajustes pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
2. El reajuste de la asignación de retiro, año por año, a partir de 1997 a la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el literal anterior.
3. El pago efectivo e indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año de 1997 en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho pretérito.
4. De negarse por parte de ese despacho las pretensiones antes solicitadas, se cite la norma en la que se sustenta la decisión.

I. HECHOS

1. En la actualidad mi poderdante goza de la asignación de retiro que le fue reconocida mediante Resolución por la caja de retiro de las Fuerzas Militares.
2. En 1997 su asignación de retiro fue reajustada en un 17.49%, cuando el IPC del año 1996 fue del 21.63%, presentándose un decremento en su asignación de retiro del 4.14%.
3. En el año 1999 el incremento fue del 14.91%, cuando el IPC del año 1998 fue del 16.70%, presentándose un decremento de su asignación de retiro del 1.79%.
4. En el año 2001 el incremento fue del 5.66%, cuando el IPC del año 2000 fue del 8.75%, presentándose un decremento de su asignación de retiro del 3.09%.
5. En el año 2002 el aumento fue del 4.97%, cuando el IPC del año 2001 fue del 7.65%, presentándose un decremento en su asignación de retiro del 2.68%.
6. En el año 2003 el aumento fue del 6.06%, cuando el IPC del año 2002 fue del 6.99%, presentándose un decremento en su asignación de retiro del 0.93%.
7. En el año 2004 el incremento de su asignación fue del 5.28%, cuando el IPC del año 2003 fue del 6.49%, presentándose un decremento de su asignación de retiro del 1.21%.

8. Los anteriores incrementos fueron realizados desconociéndose lo establecido en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y del artículo

SISTEMATIZADO

Responsable:

ORGANIZACIÓN ALVARO RUEDA CELIS Abogados Asociados

Especialistas en seguridad jurídica

Carrera 26 No. 72 - 73 Bogotá, Barrio Alcázares

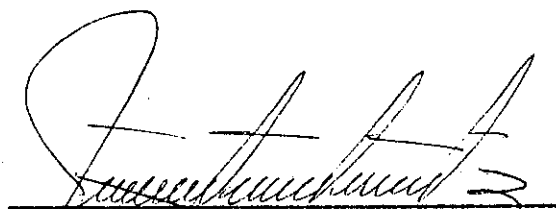
Tel: 329 00 40 - Cel: 318 708 05 72

PODER ESPECIAL

GUSTAVO TORRES BETANCUR identificado como a parece al pie de mi firma, titular de pensión reconocida por la caja de Retiro de las Fuerzas Militares manifiesto por medio del presente escrito atentamente manifiesto al señor Mayor General RODOLFO TORRADO QUINTERO, que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor ALVARO RUEDA CELIS abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No. 170.560 del Consejo Superior de la Judicatura para que en mi nombre realice por la vía administrativa ante la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES todas las gestiones encaminadas a obtener la reliquidación de mi pensión aplicando el mayor porcentaje entre el decretado por el Gobierno Nacional para reajustar las asignaciones Básicas del personal en servicio activo en aplicación de la escala gradual porcentual y el Índice de Precios al Consumidor IPC aplicado para el reajuste de las pensiones del régimen general de conformidad a los establecido en el artículo 1º de la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, igualmente el incremento de mi asignación producto de la aplicación de los nuevos valores, además gestionar el pago efectivo e indexado correspondiente a la diferencia entre la reliquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de mi asignación de retiro.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para hacer peticiones, recibir, desistir, acordar, y/o conciliar con la Administración, liquidar la condena en extracto, ejecutar, tutelar, sustituir, reasumir, gestionar la expedición de documentos necesarios ante las entidades oficiales y en general para realizar todas aquellas otras facultades previstas en el artículo 70 del código de Procedimiento Civil.

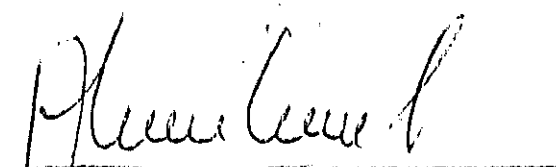
Del Señor Director



GUSTAVO TORRES BETANCUR

CC No 5762505 DE SOCORRO SANTANDER

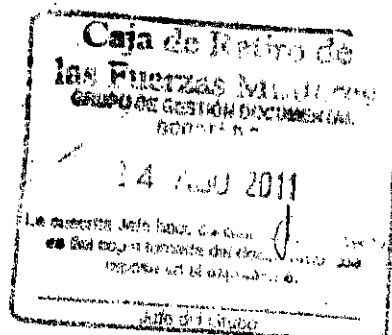
Acepto el anterior poder.



ALVARO RUEDA CELIS

C.C. 79.110.245 de Font ibón

T.F. 170.560 del H.C.S.J.





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.



22/sep/2009 13:28:38 DMARTINEZ

**CAJA DE RETIRO
DE LAS FF.MM.**

DEST
ATN
ASUNTO
REMITA
FOLIOS

ABOGADO
ALVARO RUEDA CELIS
DERECHO DE PETICION T.1605
RECONOCIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES
AL CONSTESTAR CITE ESTE No 47324



* 0 0 0 0 4 0 5 1 3 8 *

CONSECUTIVO 47324
(Envío) CRC-SAD

CREMIL 72751

No. 320

Doctor
ALVARO RUEDA CELIS
Calle 73 No. 25-32
Bogota

Asunto: Respuesta Petición

En atención a su derecho de petición presentado en esta entidad bajo el No. 72751 de fecha 15 de septiembre de 2009, por medio del cual solicita el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, a favor del señor SM ® EJC TORRES BETANCOURT GUSTAVO le informo lo siguiente:

El Inciso Segundo del artículo 217 de la Constitución Nacional, en su tenor literal reza "La ley determinara el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que le es propio (...)".

El régimen prestacional del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, se rige actualmente por las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1211 de 1990, derogado parcialmente por el decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, normas de carácter especial, que prevalecen sobre las disposiciones de carácter general. (Artículo 5º. Ley 57 de 1887).

vale la pena señalar, que para efectos de reajuste de las asignaciones de retiro, el régimen prestacional especial de los miembros de las Fuerzas Militares desde 1945 y aun en la normatividad vigente, contempla el principio de oscilación en los siguientes

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PARA LA FUERZA PÚBLICA

SISTEMATIZADO

Responsable: Nancy
Fecha: 29-09-09

"Por un Servicio Justo y Oportuno"

No 27-00 Edificio Bochica. Mezanine, Piso 2.

Commutador: 3537300 - Fax: 3537306

Página Web: www.cremil.gov.co



términos: "Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado.

El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulan ajustes en otros sectores de la Administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley". (Resaltado fuera del texto)

Por consiguiente, el reajuste de las asignaciones de retiro se aplica únicamente con sujeción al principio de oscilación conforme lo dispone la normatividad especial que rige para los miembros de las fuerzas militares.

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional, anualmente mediante decreto ejecutivo, reajusta los sueldos básicos del personal en actividad a partir del cual se incrementa las asignaciones de retiro en las mismas proporciones. Utilizar mecanismos, fórmulas o sistemas de liquidación diferentes, equivaldría a aplicar un sistema prestacional distinto al establecido en el régimen especial para la Fuerza Pública.

Por lo anterior es claro que al militar en mención, se le han hecho los reajustes que por ley le corresponden como militar en goce de asignación de retiro, no habiendo lugar a que se reajuste su asignación de retiro con base en el IPC, sistema de reajuste del régimen general de pensiones.

Reciba un Cordial Saludo,


Capitán @ EDILBERTO CALLEJAS GARAY
Subdirector de Prestaciones Sociales

Anexo:

Copia: 5762505

Proyecto: PD Jeanet Suárez

Elaboro: ASD. Nayibi Ruiz



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.



Bogotá, D.C.

CERTIFICADO

No. 380

CREMIL: 73054

23/nov/2009 14:57:32 DMARTINEZ

**CAJA DE RETIRO
DE LAS FF.MM.**



* 0 0 0 0 4 1 9 2 7 1 *

DEST
ATM
ASUNTO:
REMITA
FOLIOS

AFILIADO
GUSTAVO TORRES BETANCOURT
CERTIFICACIÓN T.1927
ATENCIÓN AL USUARIO

1 AL CONTESTAR CITE ESTE NO. 61457

CONSECUTIVO 61457
[Emitido] GRC - SAD

CERTIFICACION DE UNIDAD MILITAR

LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

CERTIFICA:

Que revisada la hoja de servicios militares en el expediente administrativo del señor **Sargento Mayor (r) del Ejército Nacional GUSTAVO TORRES BETANCOURT** identificado con cédula de ciudadanía No. 5.762.505, se pudo establecer que la última unidad donde prestó sus servicios militares fue en el **BATALLON DE ARTILLERIA No. 3 "BATALLA PALACE" en BUGA.**

La anterior información fue extraída del expediente administrativo del militar, a través del Sistema de Administración Documental (SAD).

La presente se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Angela Rocio Barrero Ballesteros

Profesional de Defensa ANGELA ROCIO BARRERO BALLESTEROS
Responsable del Área de Atención al Usuario

Elaboró: TSD Rubén Gómez.



Certificado No. 380-380-1



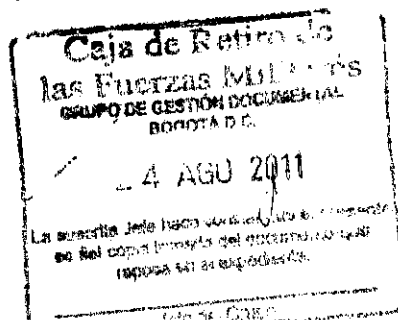
Certificado No. 380-380-1

"Por un Servicio Justo y Oportuno"

Cra 13 No 27-00 Edificio Bochica. Mezanine, Piso 2

Commutador: 3537300 - Fax: 3537306

Página Web: www.cremil.gov.co





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.



Bogotá D.C.,

CERTIFICADO

No.613

25/sep/2009 13:54:52 DMARTINEZ

**CAJA DE RETIRO
DE LAS FF.MM.**



CREMIL 73052

DEST
ATN
ASUNTO
REMITA
FOLIOS

AFILIADO
GUSTAVO TORRES BETANCOURT
CERTIFICACIÓN T.1688
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
2 AL CONTESTAR CITE ESTE No. 48193

CONSECUTIVO 48193
[Envíelo] CRO - SAO

LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

CERTIFICA

Que el señor Sargento Mayor (r) GUSTAVO TORRES BETANCOURT. Identificado con la cédula de ciudadanía No.5.762.505, tiene legalmente reconocida Asignación de Retiro.

Que el valor de la Asignación de Retiro del citado Suboficial y los incrementos anuales reconocidos a los señores Suboficiales en el grado de Sargento Mayor de conformidad con los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, son los siguientes:

AÑO	ASIGNACIÓN DE RETIRO	PORCENTAJE INCREMENTO	DECRETO No.	DE FECHA
1996	\$809.240.	30.24%	107	Enero 15 de 1996
1997	\$950.781.	17.49%	122	Enero 16 de 1997
1998	\$1.177.960.	23.89%	058	Enero 10 de 1998
1999	\$1.353.598.	14.91%	062	Enero 08 de 1999
2000	\$1.478.535.	9.23%	2724	Diciembre 27 2000
2001	\$1.562.221.	5.66%	2737	Diciembre 17 2001
2002	\$1.639.863.	4.97%	745	Abril 17 2002
2003	\$1.739.400.	6.07%	3552	Diciembre 10 2003
2004	\$1.831.243.	5.28%	4158	Diciembre 10 2004

Atentamente,

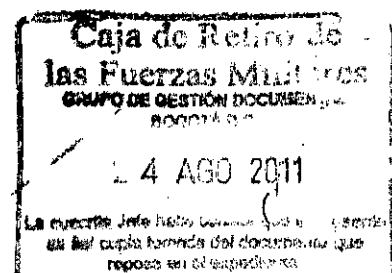
Profesional de Defensa **MARÍA CLAUDIA AGUIRRE GUTIÉRREZ.**
Coordinadora Grupo Gestión Documental

Proyectó: ASD Ever Espinosa

Elaboró: ASD Yazmely Pinto



"Por un Servicio Justo y Oportuno"
Cra 13 No 27-90 Edificio Bochica Mezanine, Piso 2
Commutador: 3537300 - Fax: 3537306
Página Web: www.cremil.gov.co



HOJA(LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 751/EJC/
Registrada Libro No. 12 Folio 252/
Fecha de expedición: 14-SET-87/

a) DATOS SOBRE

Fuerza: Ejército Nacional
Ultima Unidad: Batallón Palacé
Causal de Retiro: Solicitud Propia

b) DATOS PERSONALES

- Sargento Mayor: TORRES BETANCOURT GUSTAVO.
- C. C. No. 5.762.505 de 3000RO. Código 6688792
- Fecha de nacimiento: 05-FB-47
- Nombre del padre: CLEMENTINA
- Nombre de la madre: JUAN MANUEL
- Estado Civil: CASADO/
- Nombre de la esposa: EMILIA VELEZ ARCE/
- Matrimonio: 24-FEB-73. /
- Hijos y fechas de nacimiento. Documentos Probatorios:
- GUSTAVO ALONSO/ 26-FB-74. /
- ERIKA MARITZA/ 18-AG-76. /
- FRANCY JOHANNA/ 03-03-80. /

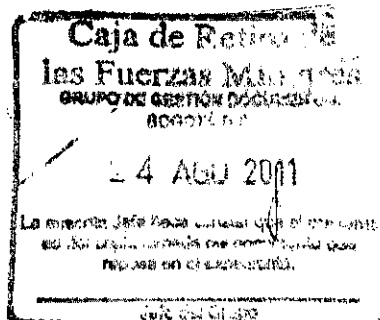
CONTRALORIA CENTRAL DE LA ESPUSACA
Auditoria Especial Causa Retiro
FUERZAS MILITARES

Revisor de Documentos

c) RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS

NOVEDAD	DISPOSICION Número y año	FECHAS		TIEMPO		
		De	A.	A.	M.	D.
SOLDADO	CD. # SIN	24-EN-66	01-NV-66	00	09	07
CABO SEGUNTO	OD. 247/66	01-NV-66				
SARGENTO MAYOR	OAP. 1019/86	05-M2-86				
RETIRO	RES. 00431/87		16-AG-87	20	09	15
TRES MESES ALTA	RES. 00431/87	16-AG-87	15-NV-87	00	03	00
TIEMPO DOBLE	DTO. 1048/70	01-NV-66	16-DC-68	02	01	15
TIEMPO DOBLE	DTO. 739/70	21-AB-70	15-MY-70	00	00	25
TIEMPO DOBLE	DTO. 1386/74	26-FB-71	29-DC-73	02	10	03
DIF. AÑO LAB.	DTO. 89/84			00	04	14
TOTAL SERVICIO				277	02	18
SON VEINTISIETE (27) AÑOS, DOS (2) MESES, DIECINUEVE (19) DIAS.						

OBSERVACIONES: Ninguna
Elaboró. D2. Hilga Rueda.



Vienen...

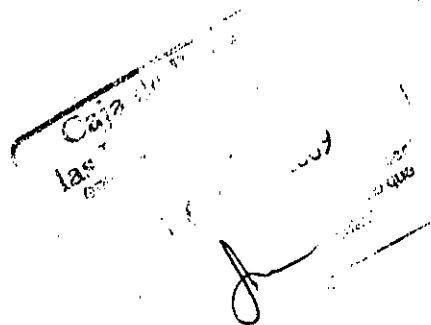
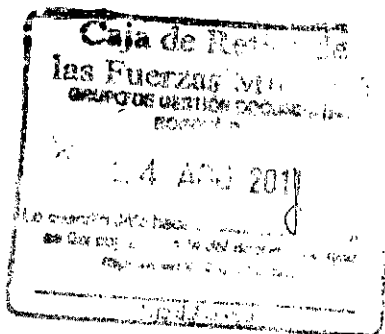
Teniente Coronel MIGUEL IVAN CURE
Jefe Sección Prestaciones Sociales

Coronel EDUARDO SOLER GOMEZ
Jefe del Departamento E-1

d) APROBACION:

El suscrito Mayor General Comandante del Ejército, en uso de las facultades contenidas en los Artículos 225 y 226 del Decreto 89/84, APRUEBA la presente Hoja de Servicio correspondiente al SM. TORRES BETANCOURT GUSTAVO, expedida para los efectos legales pertinentes.-

Mayor General OSCAR EOTERO RESTREPO
Comandante del Ejército.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

RESOLUCION NUMERO 1402 DE 1987

[- 7 OCT. 1987]

Por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al Sargento Mayor (r) del Ejército GUSTAVO TORRES BETANCOURT.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 223 del Decreto Ley 089 de 1984, y

CONSIDERANDO :

Que en la Hoja de Servicios Militares distinguida con el No. 751-EXC. registrada en el Libro No. 10, Folio 253, expedida el 14 de Septiembre de 1.987 - - - y debidamente aprobada por el señor Mayor General Comandante del Ejército - - -, consta que el señor GUSTAVO TORRES BETANCOURT - - - - - fué retirado de la actividad militar por Resolución 0431 de 1987, por "SOLICITUD PROPIA" - - - - - baja efectiva 15 de Noviembre de 1.987, con el grado de Sargento Mayor del Ejército.

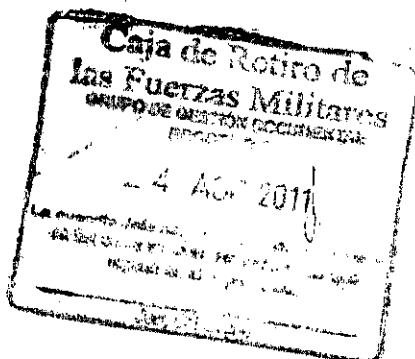
Que en la Hoja de Servicios Militares antes citada y en los demás documentos probatorios que obran en el expediente, está acreditado lo siguiente :

Tiempo de servicios:	27 años, 02 meses y 19 días
Estado civil:	Casado
Nombre de la esposa:	EMILIA VELAZ ARCE
Fecha de matrimonio:	14 de Febrero de 1.975
Nombre de los hijos y fechas de nacimiento :	
- GUSTAVO ALONSO:	26 de Febrero de 1.974
- ERICA MARITZA:	18 de Agosto de 1.976
- FRANCY JECARMA:	03 de Octubre de 1.980

INTELECTORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Auditoria Especial Caja Retiro
FUERZAS MILITARES

Revisión de Documentos

Que de conformidad con las disposiciones legales contenidas en los artículos 151 literal b) y 155 del Decreto Ley 089 de 1984, el Subordinado arriba mencionado tiene derecho al reconocimiento de una asignación de retiro en cuantía del 85% del sueldo de actividad correspondiente a



Por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al **Sargento Mayor (r) del Ejército GUSTAVO TORRES BETANCOURT.**

ARTICULO 3o. Para el cobro de su prestación el **Sargento Mayor (r) del Ejército GUSTAVO TORRES BETANCOURT** - - - - - deberá comprobar previamente su supervivencia.

ARTICULO 4o. Contra la presente Resolución solamente procede el recurso de reposición ante la Dirección General de la Caja, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 223 del Decreto Ley 089 de 1984.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

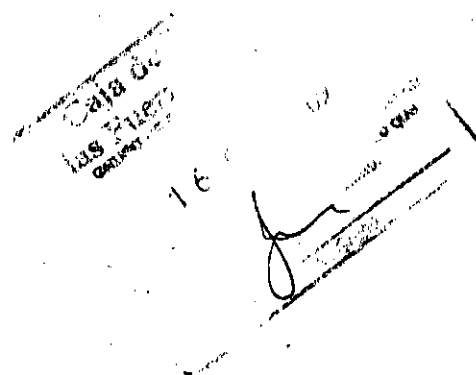
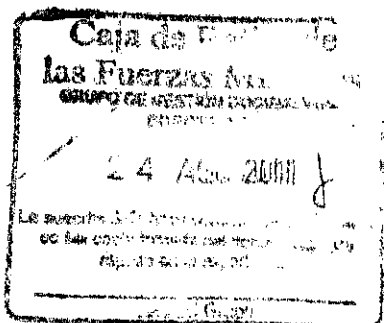
Dada en Bogotá, D.E., a - 7 OCT. 1987

Mayor General (r) JOSE M. ARBELAEZ CABALLERO
Director General Caja de Retiro FF. MM.

Brig. Gral. (r) HILDEBRANDO ROA LEGUIZAMON
SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES (E.)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Auditoria Especial del Retiro
FUERZAS MILITARES

REVISOR DE DOCUMENTOS



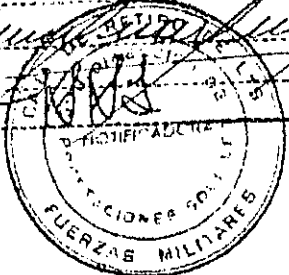
MICROFILMED

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCION DE PENSIONES SOCIALES
SECCION DE NOTIFICACIONES Y RECURSOS LEGALES

En la ciudad de Valparaíso, 30 de 1987, notificó
presuntamente la anterior providencia a Guillermo
Benavente SS
51763.508 locum
y le (s) hizo saber que contra esta providencia el recurso de REPOSICION
el cual debe sustentarse dentro de los cinco (5) días siguientes.
Inscribiendo (si firma) (s) MANIFIESTA: ESTOY DE ACUERDO

Los Notificados:

Notificado:



Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL
24 AGO 2011

Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares
16
109
109
109



**PROCURADURIA 60 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ANTE
LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE CALI**

CONCILIACION PREJUDICIAL No. 186

CONVOCANTE: GUSTAVO TORRES BETANCURT

CONVOCADA: CREMIL

En los términos de la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, la
Procuraduría 60 Judicial I para Asuntos Administrativos expide la siguiente

CONSTANCIA:

1. Que mediante apoderado judicial, el señor GUSTAVO TORRES BETANCURT presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 24 de marzo de 2010.
2. Que la pretensión de la solicitud es la de obtener el reconocimiento y pago del reajuste de su asignación de retiro, con la aplicación del IPC, así como el valor del correspondiente retroactivo y los reajustes legales.
3. Que fijada fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, ésta se celebró el 5 de mayo de 2010 sin la asistencia de la parte convocada, quien con anterioridad envió certificación del Comité de Conciliación en la cual se precisa la posición jurídica de la entidad en el sentido de no conciliar temas como el que es asunto de debate en la solicitud de conciliación presentada por la parte convocante.
4. Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1716 de 2009, este Despacho declaró fallida la audiencia de conciliación y agotada la etapa conciliatoria.
5. Que conforme al artículo 13 de la ley 1285 de 2009, se da por cumplido el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
7. En los términos de la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, se devolverá a la parte convocante, los documentos aportados con la solicitud de conciliación.

Dada en Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil diez (2010).

Atentamente,



EDUARDO SILVA OROZCO

Procurador 60 Judicial I para Asuntos Administrativos

Señores
JUZGADOS ADMINISTRATIVO DE BUGA
Sección Segunda (Reparto)
 E. S. D.

MEDIO DE CONTROL : DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE : GUSTAVO TORRES BETANCOURT

DEMANDADO : CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

I. DEMANDA

Yo, ALVARO RUEDA CELIS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en nombre y representación del señor **SM GUSTAVO TORRES BETANCOURT** igualmente mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía **5.762.505 DE SOCORRO**, conforme al poder que me ha sido conferido y en ejercicio de la **ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, ante ustedes presento esta demanda contra la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**, representada legalmente por su director, señor Mayor General **EDGAR CEBALLOS MENDOZA**, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, o quien haga sus veces, para que por los trámites del proceso ordinario, se profiera sentencia sobre las siguientes:

II. PRETENSIONES

- 1) Declarar la nulidad del acto administrativo 47324 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009 mediante el cual, la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** negó las peticiones solicitadas por mi poderdante.
- 2) Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho se condene a la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** a reajustar la asignación de retiro de mi poderdante con aplicación del mayor porcentaje entre el Índice de Precios al Consumidor IPC, y el decretado por el Gobierno Nacional para incrementar las asignaciones básicas de los integrantes de la Fuerza Pública en cumplimiento de la escala gradual porcentual, para los años **1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004** con fundamento en los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 238 de 1995.
- 3) Ordenar el pago efectivo e indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre el reajuste solicitado y las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año de **1997** en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado.
- 4) Ordenar el pago de los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del reconocimiento de la aplicación de los porcentajes mencionados (precitados) en los numerales anteriores a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, en la forma y términos señalados en los artículos 192 Y 195 del CPACA (Sentencia C- 188/99, expediente 2191 del 24 de marzo de 1999).
- 5) Ordenar a la Entidad demandada el pago de gastos y costas procesales, así como las agencias en Derecho.

GUSTAVO TORRES BETANCOURT

IPC

III. HECHOS

1. Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 163° del Decreto 1211 de 1990, **LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**, mediante Resolución N° 1402 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 1987, reconoció asignación de retiro al señor SM **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**.
2. Desde que mi poderdante obtuvo la asignación de retiro ésta viene siendo reajustada anualmente mediante la aplicación del principio de oscilación contemplado en el Artículo 169 del decreto 1211 de 1990.
3. El constituyente primario estableció en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política el derecho que tiene los pensionados a que sus mesadas mantengan el poder adquisitivo constante.

"la Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante"

"Por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelar o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a la Ley"¹

4. La Ley 100 de 1993 en el artículo 14 contempla que para que las pensiones mantengan el poder adquisitivo constante estas se deben reajustar de oficio los primeros de enero de cada año en un porcentaje que no sea inferior al del IPC del año anterior certificado por el DANE.
5. La asignación de retiro de mi poderdante en los años **1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004** fue reajustada en un porcentaje inferior al índice de precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, generándose una diferencia en contra de mi poderdante en los siguientes porcentajes:
 - a. Para el año 1997 : El 4.14 %
 - b. Para el año 1999 : El 1.79 %
 - c. Para el año 2001 : El 3.09 %
 - d. Para el año 2002 : El 2.68%.
 - e. Para el año 2003 : El 0.93%, y
 - f. Para el año 2004 : El 1.21%.
6. El Congreso de la República expidió la Ley 238 de 1995, que adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 así:

"Artículo 1. Adiciónese al Artículo 279 de la Ley 100 de 1993 con el siguiente párrafo:

Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta Ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados."
7. Con el memorial N° 72751 del 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, mi poderdante radicó ante la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, derecho de petición el cual tenía por objeto:

¹ Acto legislativo 01 del 22 de julio de 2005
GUSTAVO TORRES BETANCOURT

- a. La reliquidación, reajuste y pago de la pensión que viene disfrutando mi poderdante, de conformidad con los porcentajes señalados en el numeral anterior.
 - b. Igualmente se solicitó en esta petición, indexar los nuevos valores arrojados por la reliquidación.
8. La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES respondió desfavorablemente la solicitud contenida en el derecho de petición, mediante acto administrativo N° 47324 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, que aquí se demanda.

IV. CONCILIACION PREJUDICIAL

Señor Juez, la presente demanda no está acompañada del acta de conciliación prejudicial de que trata el artículo 161 del numeral 1° del CPACA, ya que si bien es cierto que el medio de control es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, las pretensiones formuladas en la demanda no son conciliables, por estar directamente ligados a los derechos laborales como lo es el de la pensión, que por su calidad de irrenunciable e imprescriptible no es objeto de transacción, como lo demostraré a continuación:

El artículo 161 de la Ley 1437 **“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”** en el numeral 1° contempla en forma expresa que **se exigirá como requisito previo para demandar, la conciliación extrajudicial, “cuando los asuntos sean conciliables”**, así:

Ley 1437, artículo 161. Requisitos previos para demandar.

La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

El Constituyente Primerio con el ánimo de proteger al trabajador estableció en el artículo 53° de la Constitución Política, la Irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, de tal forma que las garantías establecidas a favor del trabajador no puede ni voluntaria ni forzosamente, por mandato legal ser objeto de renuncia.

Igualmente el artículo 48° de la Constitución Política, “garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”, y en el entendido que el derecho a la pensión y al mantenimiento del poder adquisitiva de la mima hace parte del derecho a la seguridad social esta no es conciliable ni renunciante.

JURISPRUDENCIA DEL H. CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL TEMA

El H. Consejo de Estado, en varias sentencias se ha pronunciado sobre el tema, fijado la siguiente jurisprudencia²:

Sentencia del 11 de marzo de 2010, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicado N° 2009 – 00130, actor **Nora Peralta Ibáñez, Magistrado Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.**

“Del caso concreto

Advierte la Sala que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el Fondo de Previsión Social del Congreso es una acción de lesividad, la cual fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 28 de mayo de 2009, con el argumento de que la parte demandante no agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.

En efecto, con la expedición de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009 el legislador introdujo varias modificaciones a la Ley 270 de 1996, entre ellas, la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Sobre el particular, el artículo 13 de la citada norma señaló como requisito de procedibilidad, para el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y controversias contractuales, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial. Así se lee en la referida norma:

“ARTÍCULO 13. Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.”.

De la norma transcrita, se advierte que la conciliación extrajudicial únicamente se exige como requisito de procedibilidad cuando el asunto que se pretende controvertir en sede jurisdiccional, tenga el carácter de conciliable. No obstante ello, la norma no señaló las pautas o criterios que le permitieran al juez identificar la naturaleza de los asuntos que eventualmente pueden someterse al trámite de la conciliación extrajudicial. (Negrilla y subrayado es nuestro)

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 11 de marzo de 2010, radicado N° 2009 – 00130, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. H. Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección “B”, Acción de Tutela, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicado N° 2009 – 01243, MP: Víctor Hernando Alvarado Ardila. H. Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A” Acción de Tutela, Sentencia del 01 de julio de 2009, radicado N° 2009 – 00817, MP. Alfonso Vargas Rincón. Tribunal de Cundinamarca, Sentencia del 29 de abril de 2010, radicado N° 2009 – 00147, M.P. Yolanda García de Carvajalino, Sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicado N° 2009 – 00067, MP. Cerveleon Padilla Linares, Sentencia del 15 de abril de 2010, radicado N° 2009 – 00042, MP. José María Armenta Fuentes.

Sin embargo, debe decirse que el artículo 53 de la Constitución Política es la preceptiva que autoriza la conciliación o transacción sobre los derechos de carácter laboral. En efecto, por intermedio de la citada cláusula constitucional, el constituyente de 1991 le atribuyó al Congreso de la República el deber de expedir el estatuto del trabajo teniendo en cuenta, entre otros aspectos, unos principios mínimos fundamentales de carácter laboral, la Irrenunciabilidad de los beneficios mínimos contenidos en las normas laborales y las facultades para conciliar y transigir sobre derechos inciertos y discutibles.

Así se lee en el citado artículo:

“ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; **facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles**; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”.

En este orden de ideas, el artículo en cita establece como garantía fundamental en materia laboral, el principio de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el cual refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para todo trabajador tiene el derecho laboral. De tal forma que las garantías establecidas en su favor, no puedan voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia.

Lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano, y el hecho de que los derechos y prerrogativas en ellos reconocidos se sustraigan a los postulados de la autonomía de la voluntad privada. Así lo preceptúa el artículo 14 de Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que: “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables.”.

Sobre este particular, debe decirse que el derecho a la seguridad social, en punto de la prestación pensional, constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable, del trabajador, el cual hace parte de las condiciones de dignidad y justicia que deben orientar toda relación laboral.

Así lo ha sostenido esta Sección¹:

" (...) Es indispensable no perder de vista que son materia de conciliación, derechos que tengan el carácter de "inciertos y discutibles" estos son los autorizados por el artículo 53 de la Carta Política, y a los que hace referencia la Ley Estatutaria al establecer dicho requisito "... **cuando los asuntos sean conciliables...**"

Cuando una persona considera que ha causado el derecho a la pensión, por cumplir los requisitos señalados en la ley, las partes involucradas en la eventual controversia judicial, no están en posibilidad jurídica de conciliar tal derecho. **Él, como se sabe, es de carácter imprescriptible e irrenunciable, las condiciones para su reconocimiento están señaladas en la ley y ella no puede ser objeto de negociación por ninguno de los extremos, por ser de orden público.**

La anterior, es la razón de ser del condicionamiento señalado en la ley, para exigir la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad del contencioso administrativo laboral **"...cuando los asuntos sean conciliables..."** de lo contrario el legislador no hubiera consignado dicha frase.

(...)

Insiste la Sala en que para la exigencia del requisito de procedibilidad en examen, el juez en materia contencioso administrativa debe observar extremo cuidado con "los derechos ciertos y discutibles" susceptibles de conciliación en materia laboral, puesto que la mayoría de ellos son irrenunciables e imprescriptibles y para sus destinatarios son fundamentales, como sucede con el derecho a la pensión. De ahí que el rechazo de la demanda por ese motivo implica el observar especial responsabilidad en la actividad judicial. (...)."

De acuerdo con la norma transcrita, y las consideraciones que anteceden, la conciliación y la transacción como mecanismos alternativos para la solución de conflictos sólo resultan admisibles en las controversias que giran en torno a derechos inciertos y discutibles razón por la cual, no resulta procedente exigir como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial, prevista en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009², si lo que se quiere discutir, como en este caso, es la legalidad de una prestación pensional dado su carácter de derecho irrenunciable, cierto e indiscutible".

Señor Juez, como la reclamación presentada lo que se busca es el reajuste de la asignación de retiro de mi poderdante, con la aplicación del Índice de Precios al Consumidor para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, por la naturaleza de la reclamación se evidencia claramente que es un asunto que **no es conciliable**, por hacer parte de los principios mínimos que la Constitución y la ley establecieron como irrenunciables y no son materia de transacción. Por lo anterior, solicito al despacho se de el trámite a la presente demanda.

¹ Sentencia de 1 de septiembre de 2009. Rad. 2009-00817-00(AC). M.P. Alfonso Vargas Rincón.

² Reglamentada por el Decreto 1716 de 2009.

IV. NORMAS VIOLADAS

Considero que con el desconocimiento del mandato constitucional y de normas legales que **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**, ha trasgredido nuestra Constitución Política en su preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 13º, 46º, 48º, 53º y 58º. Igualmente desconoció la Ley 238 de 1995 en su artículo 1º, la Ley 100 de 1993 en los artículos 14, 279 en su parágrafo 4º y ley 4ª de 1992 en su artículo 2º literal a) y 137 del CPACA.

V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

1. ESTADO SOCIAL DE DERECHO

"ARTICULO 1º. Colombia es un Estado social de derecho,...."

"ARTICULO 2º Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover el desarrollo la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la constitución..."

Señor Juez, la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** al negarle a mi poderdante el derecho a que su pensión mantenga el poder adquisitivo constante, está violando los principios fundamentales propios del Estado Social de Derecho establecido en el artículo 1º del mandato superior.

La Honorable Corte Constitucional en sentencias sobre el tema motivo de la presente demanda se ha pronunciado fijando la siguiente jurisprudencia:

Sentencia Nº C - 862 del 19 de octubre de 2006, Magistrado ponente Dr HUMBERTO ANTONIO PORTO SIERA, sobre el tema plasmo el siguiente concepto:

"Por otra parte, caber recordar brevemente que el surgimiento y consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al reconocimiento y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera tal que la actualización periódica de las mesadas pensionales sería una aplicación concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales en virtud del modelo expresamente adoptado por el artículo primero constitucional". (El subrayado es nuestro)

En sentencia C- 367 de 1995 con ponencia del Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO en los siguientes términos:

"Los pensionados, que al fin y al cabo gozan de especial protección en cuanto su situación jurídica tiene por base el trabajo (artículo 25 C.P.), son titulares de un derecho de rango constitucional (artículo 53 C.P.) a recibir puntualmente las mesadas que les corresponden y a que el valor de éstas se actualice periódicamente según el ritmo del aumento en el costo de la vida, teniendo en cuenta que todo pago efectuado en Colombia, al menos en las circunstancias actuales, debe adaptarse a las exigencias propias de una economía inflacionaria. Elo es consustancial al Estado Social de Derecho, que se ha instituido como característica sobresaliente de la organización política y como objetivo prioritario del orden jurídico fundado en la Constitución, por lo cual no cabe duda de la responsabilidad en que incurren los funcionarios y entidades que desatienden tan perentorios mandatos." (El subrayado es nuestro).

Como se puede deducir de los pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, entre los fines esenciales del Estado de Derecho esta la protección de los derechos económicos de todos los colombianos y en especial de las personas de tercera edad como son los pensionados. Cuando la Caja le niega a mi poderdante la actualización de su mesada, entra en contradicción con los

principios constitucionales establecido en el artículo primero y segundo de la norma superior.

2. PRIMACÍA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL FRENTE A LA LEGAL EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES sustenta su negativa de conceder los reajustes solicitados, en que los aumentos a las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública a su cargo, fueron reajustados de conformidad con las disposiciones vigentes, tomando en cuenta los decretos que anualmente expide el Gobierno para fijar los sueldos básicos del personal en servicio activo en el respectivo año: D.107/96, 122/97, 58/98, 62/99, 2724/00, 2734/01, 745/02, 3552/03, 4158/04.

En la anterior argumentación la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, desconoce la supremacía constitucional sobre la norma legal, afirmación que me permito sustentar de la siguiente manera:

- a. Desde el preámbulo de nuestra carta magna, se dispone asegurar la igualdad y un orden social justo para los colombianos, pilar constitucional ratificado en su artículo 2º como fines esenciales del estado y de obligatoria observancia por parte de sus autoridades.
- b. El Artículo 4º de la Constitución Política señala que: "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros acatar la Constitución y las leyes..."
- c. Igualmente el artículo 4º es concordante con los artículos 1º, 2º, 3º, y 95, de la misma Carta; cuando se presentan incompatibilidades entre constitución y ley, debe inaplicarse la norma legal, acudiéndose a la excepción de inconstitucionalidad, facultad que deben observar con mayor prioridad las autoridades que tienen jurisdicción y competencia como en el caso concreto: la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
- d. Para los años motivo de la presente reclamación, el régimen pensional para los miembros de las Fuerzas Militares, estaba dispuesto en el decreto Ley 1211 de 1990, norma anterior a la actual constitución política, carta que garantiza a los pensionados el mantenimiento del poder adquisitivo de sus mesadas.
- e. El decreto ley 1211 precitado, fue expedido en el año de 1990; al momento de entrar en vigencia, no existía el mandato constitucional del derecho fundamental de la seguridad social, reconocido por la Honorable Corte Constitucional como tal, en cuanto está estrechamente ligado a la vida digna del asociado Art. 46 CN, y del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. (Arts. 48 y 53)
- f. Considero que en el caso sub examine, se han presentado, voluntaria o involuntariamente, inaplicación de la norma adecuada, justamente por el exceso normativo existente y por el advenimiento novedoso de reciente reforma constitucional, garantista de los derechos fundamentales.
- g. Adicional al artículo 4º de nuestra joven carta magna, es el código civil colombiano quien claramente señala el camino de aplicación preferente de normas sobre un mismo tema, así:

- Su artículo 10º: Reglas sobre disposiciones incompatibles entre sí, recoge el artículo 5º de la ley 57 de 1887: (...) “Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella. . .”
 - Igualmente nuestro estatuto civil en este mismo artículo 10º, cita el artículo 9º de la ley 153 de 1887, Supremacía de la Constitución, disponiendo: “La Constitución es ley reformativa y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente”
 - En síntesis, en el caso aquí demandado por ajustarse a los postulados constitucionales y legales vigentes, debe aplicarse de preferencia los artículos constitucionales números 4, 13, 46, 48 y 53, y de la ley 100 de 1993, los artículos 14 y 279 parágrafo 4º, remplazando las norma anteriores a estas, como en el caso concreto al decreto ley 1211/90, por cuanto es contrario a la letra y espíritu constitucional, pero la Caja aquí demandada, no cumple estas normatividades en el aumento anual de las pensiones a su cargo.
- h. Durante la vigencia del decreto 1211 de 1990, que regula la carrera de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, respecto de las pensiones, se ha venido aplicado el Artículo 169 que contempla “el principio de oscilación” el cual dispone que las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata este decreto, se liquidan tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones del personal en actividad para cada grado.
- i. La Caja de Retiro aquí demandada, con el fin de hacer los aumentos anuales a las asignaciones de retiro a su cargo, toma lo dispuesto en el artículo 169 de decreto 1211 de 1990, para ello espera a que el Gobierno Nacional expida el decreto mediante el “cual fija los sueldos básicos” de los miembros activos de la Fuerza Pública, y sobre esa nueva base liquida las pensiones y asignaciones de retiro, de conformidad con el grado que ostentaban al momento de adquirir el derecho, sin detenerse a observar si el porcentaje incrementado esta ajustado a la constitución y la ley.
- j. En razón de lo anterior, cuando los incrementos de las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública han sido en un porcentaje inferior al del IPC, no se está dando cumplimiento a lo establecido en los artículos constitucionales 48 y 53, que consagran el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones³, se está reduciendo y congelando su poder adquisitivo.

Como se aprecia, señor Juez, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es de orden superior y de aplicación preferencial ante cualquier norma legal que le sea contraria, encontrándose por consiguiente, que el principio de oscilación que se le está aplicando a mi cliente, es válido y constitucional en la medida que los porcentajes de aumentos anuales del personal en servicio activo, sean iguales o superiores al IPC, del año anterior, certificado por el DANE.

³ “ARTÍCULO 48...“la Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivos constantes”

En el caso de ser inferiores, como en el caso de los hechos aquí comentados, este principio, el de oscilación, es abiertamente contrario al mandato constitucional y no debe ser aplicado por cuanto desconoce la supremacía constitucional, y debe acudir al régimen general aplicando el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 tal como lo dispone la Ley 238 de 1995.

En el marco del actual ordenamiento constitucional, el Gobierno Nacional tiene facultad para fijar las asignaciones básicas en la oportunidad y en los porcentajes que estime conveniente; Pero tratándose de pensiones, su reajuste debe surtir de oficio el 1º de enero de cada año y en porcentaje, jamás inferior al IPC del año anterior; por ello, no son aplicables los mismos criterios para decretar aumentos de salarios y aumento de pensiones, por cuanto constitución y ley, han previsto tratamientos diferentes.

En materia de Jurisprudencia tenemos también sólidos soportes que aclaran el tema en estudio: La Sentencia C-182 de 1997, en la que estudiando la constitucionalidad del artículo 174 del decreto 1211 de 1990, norma en que se respalda la Caja de Retiro para expedir el acto administrativo que se demanda, y con ponencia del Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA, la Honorable Corte se pronunció sobre el sometimiento a la Constitución de los "Regímenes Excepcionales" y en este caso, el de la Fuerza Pública, así:

(...)

"Ha señalado esta Corporación en relación con el establecimiento de los llamados "Regímenes Excepcionales", que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones prestacionales más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. **Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitativo frente al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, estas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad**". (El subrayado y negrilla es nuestro)

De acuerdo con la posición de la Honorable Corte, queda claramente definida la primacía del ordenamiento constitucional frente a las demás normas, así se trate de regímenes especiales como el establecido en el decreto 1211 de 1990. Por consiguiente, hacer incrementos anuales a las asignación de retiro en un porcentaje inferior al índice de precios al consumidor (IPC) es contrario a lo establecido en el régimen constitucional (artículos 48 y 53) y a la Ley 100 de 1993, artículo 14, concomitantes con el artículo 13 de la Carta Política.

En consideración a lo anterior, la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al fijar el incremento anual de la pensión de mi poderdante, debió descalificar, tal como lo ordena la Honorable Corte, el Artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, en los años en que el porcentaje a incrementar, fue inferior al del IPC del año anterior y en aplicación de principio de favorabilidad de la Ley establecida en el artículo 53 de la constitución, aplicar la norma general de pensiones, ley 100 de 1993 artículo 14.

No aplicar el nuevo espíritu y letra constitucional, es desconocer su supremacía, lo cual genera un tratamiento inequitativo a los pensionados de la Fuerza Pública, frente al que se otorga a la generalidad de los pensionados cobijados con el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, como al artículo 1º de Ley 238 de 1995⁴.

⁴ ART. 1º—Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993 con el siguiente párrafo: "PAR. 4º—Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados".

3. VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD.

Este derecho ha sido consagrado en el Artículo 13 de la Carta Fundamental en los siguientes términos: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan"

Es en nuestro sentir, la reafirmación del principio y derecho fundamental de igualdad ante la ley, tiene por objeto materializar en forma progresiva las condiciones sociales, económicas y culturales que reduzcan al máximo los desequilibrios existentes en las oportunidades del desarrollo humano.

Cuando LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES en el acto administrativo objeto de estudio y sustento de esta demanda, niega una prestación fundamental, apoyándose en la tesis de la existencia de un régimen especial, adopta un tratamiento inequitativo, como lo he sustentado anteriormente, este al permitir la aplicación de porcentajes inferiores al del IPC en los incrementos anuales de las pensiones de la Fuerza Pública, no se ajusta a los mínimos dispuestos por el sistema general de Seguridad Social.

Reafirma mi argumentación constitucional y legal, la nutrida jurisprudencia que sobre este tema ha producido nuestra Honorable Corte Constitucional, en especial la que a continuación citaré:

Al referirse al Régimen Especial de pensiones de la Fuerza Pública, es la sentencia C - 432 del 06 de mayo de 2004, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil, la que fija los parámetros de aplicación: (...)

"como lo ha sostenido esta Corporación, dicho tratamiento diferencial debe estar encaminado a mejorar las condiciones económicas del grupo humano al cual se aplica, por lo que resultan inequitativos, es decir, contrarios al principio de igualdad, "los regímenes especiales de seguridad social que introducen desmejoras o tratamientos de inferior categoría a los concedidos por el régimen general" (Subrayado es nuestro)

Evidenciamos que en el tema de aumento anual de las asignación de retiro de la Fuerza Pública, cuando este se ha realizado por debajo del IPC, se está dando un tratamiento discriminatorio a mi poderdante, en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta Política, toda vez que en este sistema, no existe prestación adicional alguna que compense al pensionado la pérdida del poder adquisitivo, al recibir incrementos anuales por debajo del IPC, especialmente en esta economía, caracterizada por los elevados índices de inflación anual.(el subrayado es nuestro).

En sentencia T - 432 de junio 25 de 1992, la Corte Constitucional al analizar las implicaciones de este derecho expresó:

"El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, dimensiones todas esas que en justicia deben ser relevantes para el derecho".

Un caso concreto ilustra el anterior planteamiento, donde iguales circunstancias, deben tener el mismo tratamiento:

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C- 461/95, atendiendo demanda de los trabajadores de ECOPETROL, quienes al igual que los del MAGISTERIO y FUERZA PÚBLICA, son regímenes exceptuados de la aplicación del sistema general de seguridad social (Ley 100/93, art. 279), despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, otorgando los derechos contemplados en el artículo 142 ibidem (mesada 14) extendiendo este derecho para todos los pensionados y la aplicación del artículo 14 ibidem (Incremento anual observando el IPC) , con el sabio y preciso argumento de que la **"Carta Política no hace diferencia alguna dentro del universo de los pensionados. Por el contrario, consagra la especial protección de las pensiones y de las personas de tercera edad "** (Subrayado es nuestro).

Si como lo afirma la honorable Corte Constitucional, los pensionados conforman un universo en donde no existe diferencia entre ellos, sin importar el régimen mediante el cual obtuvieron tal condición, la constitución les consagra una protección por igual. No se explica el proceder de la Caja de Retiro, de darle a los pensionados a su cargo, un tratamiento desigual al que se le da a los demás pensionados, lo que constituye una clara violación al derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la CN. "Trato igual a los iguales y desigual a los desiguales", si todos los pensionados están en pie de igualdad deben de recibir igual tratamiento constitucional.

4. PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR, ARTÍCULO 46ª CP.

ARTÍCULO 46: "El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de la persona de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria".

La Caja de Retiro con su política de incrementar las asignaciones de retiro establecidas en el decreto 1211 de 1990, con la interpretación normativa que aplica, nuevamente vulnera el mandato superior contenido en el artículo 46, que asigna al Estado, la responsabilidad de proteger al adulto mayor.

Mi poderdante es un adulto mayor, quien depende exclusivamente de su mesada pensional, para suplir sus necesidades básicas, no cuenta con otros medios de subsistencia para él y su familia; la pérdida del poder adquisitivo de su pensión, producto de la ausencia de un incremento anual igual o superior al IPC, está

afectando su calidad de vida digna al ser disminuido su mínimo vital.

La caja de Retiro demandada, a partir del año 1997 realizó a la asignación de retiro de mi poderdante los siguientes incrementos:

AÑO	IPC AÑO ANTERIOR	INCREMENTO RECIBIDO	DIFERENCIA A REAJUSTAR
1997	21.63 %	17.49 %	4.14 %
1999	16.70 %	14.91 %	1.79 %
2001	8.75%	5.66%	3.09%
2002	7.65%	4.97%	2.68%
2003	6.99%	6.06%	0.93%
2004	6.49%	5.28%	1.21%
TOTAL PORCENTAJE ACUMULADOS EN SU CONTRA			13.84%

Como se puede observar, LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES ha dejado de aumentar en este caso concreto **13.84%**, afectando sustancialmente al poder adquisitivo de la asignación de retiro de mi poderdante.

El constituyente primario al instituir como derecho fundamental el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, no hizo diferenciación entre el universo de los pensionados para concederles este beneficio con el cual se pretende, que el adulto mayor pensionado, conserve una vida digna.

A mi poderdante en lo particular, se le ha desconocido este derecho y protección constitucional, por cuanto a partir de 1997 al hacerle incrementos a la mesada de mi poderdante en porcentajes inferiores al del IPC le ha venido reduciendo su poder adquisitivo, recabando respetuosamente, que ella depende económicamente para suplir sus necesidades básicas, de esta asignación.

La corte Constitucional en diversas sentencias se ha referido al tema de la protección al adulto mayor, especialmente en la C-387, del 1º de septiembre de 1994 (MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz):

"El reajuste de las pensiones, tanto para los que devengan pensiones superiores al mínimo como para aquellos cuyas mesadas son iguales a éste, tiene como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (Art. 46 CN.), quienes por sus condiciones físicas, ya sea por razón de la edad o por enfermedad, se encuentran imposibilitados para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia y la de su familia. De no existir tales reajustes las pensiones se convertirían en irrisorias, pues la devaluación de la moneda hace que pierdan su capacidad adquisitiva, en detrimento de los pensionados". (El subrayado es nuestro)

Igualmente la C - 461/95, reafirma la protección al adulto mayor pensionado de la siguiente manera:

"4. La Carta Política no establece diferenciaciones dentro del universo de los pensionados. Por el contrario, consagra la especial protección de las pensiones y de las personas de la tercera edad. No obstante, el legislador puede diseñar regímenes especiales para determinado grupo de pensionados, siempre que tales regímenes se dirijan a la protección de bienes o derechos constitucionalmente protegidos y no resulten discriminatorios." (Negrilla es nuestra)

Considero que con su actuar, la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES esta desconociendo la protección especial que la Constitución Política le asigna como agente del Estado, de brindar especial atención a las personas de tercera edad, en este caso a mi prohijado.

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C – 862 del 19 de octubre de 2006, Magistrado Ponente Dr Humberto Sierra Porto en torno al derecho que tiene los pensionados como adultos mayores de que sus pensiones mantengan el poder adquisitivo fijo la siguiente Jurisprudencia:

“Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto sujetos de especial protección constitucional”.

5. ARTICULO 48 DE LA CONSTITUCION POLITICA –MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES

“ARTÍCULO 48...“la Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante” (Subrayado es mío)

“Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho” (Subrayado es mío)

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C – 862 del 19 de octubre de 2006, Magistrado Ponente Dr HUMBERTO ANTONIO SIERA PORTO, sobre el derecho constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones fijo la siguiente jurisprudencia:

“De la anterior recuento legislativo se desprende que el legislador ha previsto por regla general la actualización periódica tanto de las mesadas pensionales ya reconocidas como del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional. La legislación reciente ha previsto que tal actualización se realice con base en el índice de precios al consumidor, es decir, ha previsto la indexación de las mesadas pensionales y del ingreso base para su liquidación.” (Las negrillas y subrayado es nuestro)

“Así, por una parte, el artículo 48 constitucional contiene una clara previsión al respecto cuando establece que “[l]a ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Este precepto, aunque por su indeterminación normativa tiene la típica estructura de principio, señala explícitamente un deber constitucional en cabeza del Congreso de la República y por lo tanto sirve de parámetro de control de las medidas adoptadas por el poder legislativo en la materia. El artículo en comento fue adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual introdujo el deber adicional en cabeza del Estado colombiano de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sin embargo, este añadido no desvirtúa el mandato cuya realización incumbe al Legislador, de definir los medios para mantener el poder adquisitivo constante de los recursos destinados a pensiones, simplemente señala expresamente un factor que ha de ser ponderado por la ley, cuya importancia por otra parte ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia constitucional de tiempo atrás”.

“La jurisprudencia constitucional se ha referido de manera reiterada tanto en sede de tutela como de constitucionalidad sobre el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y ha sostenido de manera reiterada que es un derecho

de rango constitucional, que encuentra fundamento en los distintos preceptos constitucional a los cuales antes se hizo alusión, sobre este extremo resulta ilustradora la sentencia T-906 de 2005:

También se ha dicho que la naturaleza del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones parte de la base de que el mismo es considerado como un derecho de rango constitucional. Esto en razón a que existen tres disposiciones constitucionales que lo sustentan: la primera contenida en el artículo 48, a saber: *"la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante"*, las dos restantes contenidas en el artículo 53, la primera: *"la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales... ...la remuneración mínima vital y móvil..."* y la segunda, que establece que *"el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales"*

Así mismo, no olvida la Corte que en la definición de la naturaleza y particularidades del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, otras disposiciones constitucionales juegan también un papel definitivo. Es el caso de las contenidas en el preámbulo de la Carta, al mencionarse como propósito de la Constitución la de garantizar "un orden político, económico y social justo", o la del artículo 1, que señala que la República está fundada en "la solidaridad de las personas que la integran" o las del artículo 13 que incorpora la obligación para el Estado de promover "las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva" o incluso los propios principios con sujeción a los cuales se prestará el servicio público de seguridad social, definidos en el artículo 48: "eficiencia, universalidad y solidaridad".(el subrayado y negrillas es nuestro)

"Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a juicio de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de tutela⁵ proferidas por esta Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas pensionales" (el subrayado es nuestro).

"Así, en algunas ocasiones se ha afirmado que precisamente la no indexación del salario base es un supuesto que le confiere carácter fundamental al derecho a la actualización de las mesadas pensionales, sobre esta línea argumentativa es ilustradora la sentencia T-906 de 2005 antes citada:

No obstante lo anterior, la Corte no desconoce que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones puede llegar a considerarse excepcionalmente como un derecho fundamental por conexidad.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se rompe de manera abrupta la proporción entre el valor histórico de la pensión y su valor actual y esta circunstancia tiene como consecuencia la afectación del derecho al mínimo vital, a partir de una valoración de mínimo patrimonial. Es decir cuando la mesada pensional ha sufrido una depreciación tan insoportable que negar el derecho a mantener el poder adquisitivo de la pensión, amenaza las condiciones de subsistencia del titular del derecho prestacional.

Esto también puede ocurrir cuando de las circunstancias concretas sea posible concluir, que se ha presentado un trato discriminatorio por parte de las entidades encargadas del pago de las mesadas pensionales. Así sucede cuando por ejemplo, sin ningún criterio relevante, estas entidades deciden indexar las mesadas de algunos de sus pensionados y no así las de otros, estando todos ellos en el mismo supuesto de hecho fáctico y jurídico (negrillas agregadas).

La Honorable Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha sentado

⁵ Ver entre otras la sentencias SU-120 de 2003, T-1169 de 2003, T-663 de 2003, T-805 de 2004, T-815 de 2004, T-098 de 2005.

jurisprudencia relacionada con la naturaleza jurídica de las asignaciones de retiro, determinando que esta es una pensión de vejez, que en el régimen de la Fuerza Pública se le da este nombre. Si la asignación de retiro es una pensión se le debe dar el mismo trato que la Constitución Política contempla para las pensiones, como es el mantenimiento del poder adquisitivo, el reajuste periódico y el pago oportuno, (Art. 48 y 53 C.P).

Me permito aportar al Juzgado las piezas jurisprudenciales de la honorable Corte Constitucional:

Sentencia C- 251/03/04 "En este sentido, es claro que la demanda del ciudadano Corrales Larrarte está fundamentada en un supuesto equivocado cual es el de sostener que asignación de retiro es igual a salario y por ende afirmar que al personal retirado de las Fuerzas Militares se les cancela un sueldo o salario cuando en realidad lo que percibe es una pensión de vejez que en el régimen especial de la fuerza pública se denomina asignación de retiro". (La negrilla y subrayado es nuestro).

Sentencia C - 432 de 2004: la **Asignación de retiro**: "Es una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata, como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de "asignación de retiro", una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la fuerza pública." (El Subrayado es nuestro)

Quiero hacer énfasis Señor Juez, que la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** aquí demandada, no ha tenido en cuenta el derecho que están consignados en la carta magna, desarrollados legalmente en la ley 100 de 1993, y extendidos por el legislador a los pensionados de la Fuerza Pública, mediante ley 238 de 1995, igualmente consignado en la ley 923⁶ del 30 de diciembre de 2004.

En consecuencia, constituye para las autoridades pagadoras de las pensiones, la obligación de hacer de oficio, el reajuste anual en los porcentajes mínimos que aquí se reclaman. (IPC)

Me permito complementar la anterior postura, reiterando pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, quien interpretando la Constitución Política en lo relacionado con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se ha manifestado así:

Sentencia C – 409 del 15 de septiembre de 1994, MP. Dr. HERNANDO HERRERA V. "Considera la Corte que la desvalorización constante y progresiva de la moneda, que conlleva la pérdida del poder adquisitivo del salario, originado en el fenómeno inflacionario, es predicable para los efectos de decretar los reajustes anuales a todas las pensiones de jubilación sin distinción alguna" (El subrayado es nuestro).

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C – 862 del 19 de octubre de 2006, Magistrado Ponente Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERA PORTO, sobre el derecho constitucional sobre la actualización periódica de las pensiones fijo la siguiente jurisprudencia:

"Por otra parte, el artículo 53 constitucional señala que "[e]l Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales", a diferencia del enunciado normativo contenido en el artículo 48, del cual podría objetarse que tiene

⁶ Ley 923/04 Artículo 2.4 El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas.

carácter programático al establecer un mandato constitucional de ejecución futura por el Legislador, la redacción del artículo 53 en comento señala claramente un derecho constitucional cuyo titular son los pensionados y cuyo sujeto pasivo es el Estado colombiano al cual le corresponde garantizar el reajuste periódico de las pensiones legales. Este precepto también tiene una estructura normativa propia de un principio, por lo tanto es un mandato de optimización cuya ejecución corresponde al Estado colombiano, el cual deberá satisfacerlo en la mayor medida posible de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas y ponderando los restantes derechos y bienes constitucionales en juego. Su configuración corresponde en primera medida al Legislador, el cual deberá precisar los instrumentos adecuados para garantizar la actualización periódica de las mesadas pensionales, labor en la cual cuenta con una significativa libertad". (El subrayado y negrilla es nuestro)

Como bien lo afirma la corte, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es para todas, sin distinción alguna, y esto incluye a las de la Fuerza Pública.

6. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL/PRINCIPIO IN DUBIO PROOPERARIO ARTICULO 53 C.P y 21 del CST.

Señor Juez, el artículo 53 de la Constitución Política, trae resuelto el problema que se le podría presentar al administrador en cuanto a la duda, de cual norma aplicar, cuando las disposiciones de los regímenes especiales son menos favorables que la establecida en el régimen general.

En el caso que nos ocupa, la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES para realizar el incremento anual de las asignaciones de retiro se le presentan dos circunstancias:

- Aplicar el principio de oscilación establecido en el artículo 169 del D. 1211/ 90 que consiste, en liquidar anualmente las asignaciones de retiro, tomando las asignaciones básicas que el Gobierno Nacional fija anualmente para el personal en servicio activo, o
- Realizar los incrementos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 aplicando el IPC del año anterior, tal como lo dispuso la ley 238 de 1995.

Válido es recordar que en materia laboral, es el artículo 53 de la Carta Magna quien precisa la aplicación del principio DE FAVORABILIDAD, cuando señalando los Principios mínimos fundamentales, en materia laboral, dispone:

"(...) Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social"

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C- 168 del 20 de abril de 1995, con ponencia del doctor CARLOS GAVIRIA DIAZ interpretando el artículo 53 de nuestra constitución sentó la siguiente jurisprudencia:

"e. La condición más beneficiosa

(...)

"En el inciso final, que es el precepto del cual deduce el actor la existencia de la denominada "condición más beneficiosa" para el trabajador, concretamente de la parte que se resaltará, prescribe: "la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".

"De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador, es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso."

"De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, eGN), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas, escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador". (el subrayado es nuestro)

Igualmente el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de favorabilidad, así: "En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad"; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere del "in dubio pro operario", según el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al trabajador.

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C – 862 del 19 de octubre de 2006 Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto se pronunció sobre la aplicación del principio de favorabilidad de las normas en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, así:

Igualmente para la configuración del derecho constitucional de los pensionados al mantenimiento del poder adquisitivo de la mesada pensional resultan también relevantes principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991, algunos de los cuales encuentran aplicación específica en derecho laboral, como el principio *in dubio pro operario* (art. 48 de la C.P.), mientras que otros son principios fundantes del Estado colombiano y tiene vigencia en todos los ámbitos del derecho y deben guiar la actuación de los poderes públicos y de los particulares, tales como el principio de Estado social de derecho (Art. 1 constitucional), la especial protección constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C. P.), el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P.) y el derecho al mínimo vital. (el subrayado es nuestro)

"En efecto, no sobra recordar, que en virtud del principio *in dubio pro operario*⁷ entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo beneficie⁸. Entonces, como ha sostenido esta Corporación "*[e]l sentido protector del derecho del trabajo se refleja, entonces, en la solución de conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la relación; porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser éste el que genera la injusticia que se pretende corregir*"⁹, por tal razón la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la normatividad vigente en materia laboral ha de ser interpretada en el sentido de reconocer un derecho al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones".

Por lo anterior Señor Juez, el Director de **LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** , al no encontrar expresamente definida en la Ley la forma de realizar el incremento anual de las pensiones o asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, en aplicación del principio de favorabilidad, debió de aplicar el porcentaje más alto, entre el decretado por el Gobierno Nacional para fijar las asignaciones básicas del personal en servicio activo y el del IPC aplicado a las pensiones en todos los regímenes.

⁷ Previsto no sólo en el artículo 53 constitucional sino también en el artículo 21 del C. S. T.

⁸ Cfr. SU-120 de 2003.

⁹ Ibidem.

En este orden de ideas, consideramos que el señor director de la Caja demandada, al realizar el aumento anual de la asignación de retiro, en un porcentaje por debajo del IPC, actuó en abierta contradicción con el artículo 53 de la constitución que contempla en materia laboral el principio de favorabilidad que le asiste a mi poderdante de acuerdo a los planteamientos expuestos donde constitución y ley lo disponen con carácter de obligatoriedad.

VI. DE LA PRESCRIPCION DEL DERECHO AL REAJUSTE DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO

En razón a que el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es de rango constitucional, este no prescribe. El reajuste solicitado en la presente demanda esta encaminado devolverle la capacidad adquisitiva de la asignación de retiro de mi poderdante y por ello no tiene prescripción, así lo ha manifestado la H. Corte Constitucional, el H. Consejo de Estado en variadas sentencias.

1. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

Con el fin de que se sean tenidas en cuenta en el estudio de la presente reclamación me permito transcribir la parte resolutive de sentencias emanadas del H. Consejo de Estado, resolviendo recursos de apelación de fallos proferidos por el Tribunal de Cundinamarca, así, en donde se deja claro que el reajuste no prescribe y que el fenómeno jurídico de la prescripción solo aplica a las mesadas de ahí que el pago de las diferencias que resultan del reajuste se debe ordenar con prescripción cuatrienal, como veremos a continuación:

- A- El H. Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, radicado N° 2007 – 00137, actor Héctor Alfonso Reveros Valero, Magistrado ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, el numeral 1° de la parte resolutive dispuso:

1°. **MODIFIQUESE** el numeral **SEGUNDO** de la providencia apaleada en el sentido de precisar que el reajuste reconocido deberá aplicarse para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.

2° **ADISIONESE** en el sentido de declarar prescritas causadas del 12 de septiembre de 2002, por efectos de la prescripción cuatrienal, como se indico en la parte motiva de la presente providencia.” (Negrilla y subrayado es nuestro)

- B- El H. Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del 16 de abril de 2009, radicado N° 2005 – 7048, actor Elvira Quintero de García, Magistrada ponente Bertha Lucia Ramírez de Páez, resolviendo un recurso apelación, revoco el fallo de primera Instancia promulgado por el Tribunal de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “B”, reitero la posición jurisprudencial sobre el tema así:

“2. **CONDENASE** a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- a titulo de restablecimiento del derecho a reconocer y pagar a la a reconocer y pagar a la actora la diferencia en el reajuste anual de la sustitución de la asignación de retiro, teniendo en cuenta el artículo 14 de la ley 100 de 1993, a partir del año 1997 debidamente ajustado su valor, con aplicación de la formula dicha, hasta el 31 de diciembre de 2004. (Negrilla y subrayado es nuestro)

- C- El H. Consejo de Estado, en sentencia del 16 de abril de 2009, Sección Segunda – Subsección “A”, radicado N° 2007 – 9328, actor José Orlando Hincapié Ocampo, Resolviendo una apelación de fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “A”, reafirmo la jurisprudencia en el sentido de que el reajuste con aplicación del IPC se debe hacer para los años 1997, 1999, 2001, 2002 2003 y 2004, al ordenar:

“1° MODIFICANSE los numerales **SEGUNDO Y TERCERO** de la providencia apelada en el sentido de precisar que el reajuste reconocido deberá aplicarse para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004. (negrilla y subrayado es nuestro)

- D- El H. Consejo de Estado, en sentencia del 16 de abril de 2009, Sección Segunda – Subsección “A”, radicado N° 2006 – 08363, Consejero ponente Dr. **DR. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN**, actor Armando Cifuentes Espinosa, Resolviendo una apelación de fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “A”, reafirmo la jurisprudencia en el sentido de que el reajuste con aplicación del IPC se debe aplacerse a partir de 1997, al ordenar en la parte *resolutiva* del fallo:

“Los anteriores razonamientos imponen modificar los numerales segundo y tercero de la providencia apelada y confirmar en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “**A**”, en nombre de la _ República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFÍCANSE los numerales **SEGUNDO y TERCERO** de la providencia apelada **en el sentido de precisar que el reajuste reconocido deberá aplicarse desde el año 1997 hasta el 2006**”.(negrilla y subrayado es nuestro)

- E- El H. Consejo de Estado, en sentencia del 19 de marzo de 2009, Sección Segunda – Subsección “B”, radicado N° 2003 – 07138, Consejero ponente Dr. **Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ**, actor Luis Humberto Valderrama Núñez, Resolviendo una apelación de fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “B”, reafirmo la jurisprudencia en el sentido de que el reajuste con aplicación del IPC se debe aplacerse a partir de 1997, al ordenar en la parte *resolutiva* del fallo:

“El recuento anterior le permite a la Sala concluir que es más favorable para el actor el reajuste de su pensión con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor como lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Por tal circunstancia, se., ordenará la nulidad del Oficio No. 346 de 14 de mayo de 2003, suscrito por el Director General de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional. Y, se deberá **realizar la nivelación de las asignaciones de retiro en la proporción del índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a partir del año 1997**” (Negrilla y subrayado es nuestro).

- F- El H. Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del 18 de junio de 2009, radicado N° 2007 – 2086, actor Gilberto Franco Vásquez, Magistrado ponente Gerardo Arenas Monsalve, resolviendo una solicitud de aclaración de fallo de primera Instancia promulgado por el Tribunal de Cundinamarca, reitero la posición jurisprudencial sobre el tema así:

“ADICIONESE la sentencia del 19 de julio de 2009, proferida por esta corporación, CONDENANDO a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a reconocer a Gilberto Franco Velásquez, que **a partir del año 1997**, el reajuste anual de su asignación de retiro, teniendo en cuenta el artículo 14 de la ley 100 de 1994, sin **perjuicio de la prescripción cuatrienal** del pago de dicho reajuste.”

- G- El H. Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del 11 de junio de 2009, radicado N° 2007 – 0378, actor Sabino Abril García, Magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, resolviendo una solicitud de apelación de fallo de primera Instancia promulgado por el Tribunal de Cundinamarca, **Subsección “C”**, reitero la posición jurisprudencial sobre el tema así:

“Con base en el anterior criterio, encuentra la sala que el derecho al reajuste de la asignación de retiro del actor no prescribe y, por lo tanto, **debe realizarse a partir de 1997**, como lo solicito, en tanto le sea más favorable la aplicación de la actualización con base en el IPC...”(negrilla y subrayado es nuestro)

- H- El H. Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del 11 de junio de 2009, radicado N° 2007 – 0122, actor Segundo Absalon Guerra Rubio, Magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, resolviendo una solicitud de apelación de fallo de primera Instancia promulgado por el Tribunal de Cundinamarca, **Subsección “B”**, reitero la posición

“En conclusión, en el asunto bajo estudio. La liquidación del reajuste procede desde el año 1997, tal como se deriva del tratamiento dado por el ordenamiento a los derechos pensionales; no obstante el pago de las diferencias causadas con base en esta operación...”.
(Negrilla y subrayado es nuestro)

- I- El H. Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia del 11 de junio de 2009, radicado N° 2007 – 90161, actor Alfonso Ernesto Arteaga Arteaga, Magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, resolviendo una solicitud de apelación de fallo de primera Instancia promulgado por el Tribunal de Cundinamarca, Subsección “B”, reitero la posición jurisprudencial sobre el tema así:

““En conclusión, en el asunto bajo estudio. La liquidación del reajuste procede desde el año 1999, tal como se deriva del tratamiento dado por el ordenamiento a los derechos pensionales; no obstante el pago de las diferencias causadas con base en esta operación...”.
(Negrilla y subrayado es nuestro)

2. EL ARTICULO 43 DEL DECRETO 4433 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR LA PRESCRIPCION DE LAS MESADAS.

Señor Juez, en razón a que la Fuerza pública cuenta con un régimen especial establecido en los decretos de carrera la prescripción aplicable para el pago de las diferencias que resultan del reajuste solicitado, es cuatrienal, ya que así está determinada en el artículo 169 del decreto 1211 de 1990.

Si bien es cierto que el Gobierno Nacional en el artículo 43 del Decreto 4433 estableció que la prescripción debía de ser de tres años, el H. Consejo de Estado, ha determinado que este artículo no es aplicable en razón a que el Presidente de la República se “so pretexto de reglamentar una ley excedió los términos de la misma.”, es decir no tenía competencia para hacer variaciones en este aspecto, por lo tanto sigue en firme lo dispuesto en los estatutos de carrera.

Señor Juez, con el fin de aportar elementos de juicio sobre el tema me permito transcribir los aportes de la sentencia del H. Consejo de Estado sobre el tema, así:

JURISPRUDENCIA DEL H CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA NORMA QUE EN MATERIA DE PRESCRIPCION ES APLICABLE EN ESTOS CASOS.

H. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseccion “A”, Sentencia del 4 de septiembre de 2008, radicado N° 2006 – 00107, Honorables Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Alfonso Vargas Rincón y Luis Rafael Vergara Padilla Quintero, radicado N° 2007 – 00107, actor Carlos Humberto Ronderos Izquierdo.

II. CONSIDERACIONES

“Como en el caso sub lite, el recurrente se limita exclusivamente a controvertir la decisión del tribunal de declarar prescritas las mesadas anteriores al año 2003, so pretexto de que la prescripción consagra en el artículo 155 del decreto 1212 de 1990, cuatro años, había sido modificada a tres años, con fundamento en lo estipulado en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, la sala en lo pertinente, procederá a efectuar el estudio de este cargo, teniendo en cuenta que fue el único punto sobre el cual alegó el demandante en la sustentación del recurso.

Para llegar a una decisión respecto del conflicto planteado esta corporación realizara el siguiente análisis:

Mediante el decreto 1212 del 8 de junio de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional, el Presidente de la República de Colombia en uso de sus facultades extraordinarias que le confiere la ley 66 de 1989, para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Civiles del Ministerio defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en el artículo 155 se

establece que los derechos prestacionales allí consagrados, prescriben en cuatro (4) que se contaran desde la fecha en que se hicieron exigibles. Según términos de la citada norma “el reclamó escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”

Como es sabido, los **Decretos Extraordinarios, también denominados Decretos – leyes**, eran emitidos por el presidente de la república, requiriendo de una ley de “facultades extraordinarias” y precisas, que dictaba el congreso, cuando la necesidad lo exigía o las conveniencias públicas lo aconsejaban, de conformidad con el numeral 12 del artículo 76 constitucional.

Es claro entonces que los decretos legislativos, los Decretos –leyes o Extraordinarios, los Decretos Constitucionales y los Decretos de planificación, constituyen actos administrativos de naturaleza legislativa, es decir que gozan de fuerza igual a las leyes, mientras que los decretos especiales, los reglamentarios y los ejecutivos, constituyen actos de naturaleza administrativa.

Ahora bien, en desarrollo de la ley 923 del 30 de diciembre de 2004, el Presidente de la república, expidió el decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, mediante el cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública y en el artículo 43 dispuso: “prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones revistas en el presente decreto prescriben en **tres (3) años** contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles.” Negrillas de la sala.

De la lectura atenta de la ley 923 de 2004, se tiene que si bien es cierto por medio de ésta, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución política, también lo es que en ningún aparte de la misma se desarrolló el tema de la prescripción, aparentemente reglamentado por el Decreto 4433 de 2004, en mención.

De conformidad con el numeral 11 del artículo de 189 de la carta política actual, presidente de la república, tiene asignada la potestad reglamentaria exclusiva, que lo facultad para reglamentar las leyes, con sujeción a la constitución y al contenido del mismo de la ley que se va a reglamentar, ese poder de reglamentación se reconoce en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debido para ello obrar dentro de los límites de su competencia, sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los parámetros establecidos en aquella, pues lo contrario, implicaría extralimitación de funciones y se continuaría en una invasión al campo del legislador.

De modo que el presidente de la República, al encontrarse ante una ley, puede dictar normas también generales como la ley, respetando esta última, pero que concrete mas su contenido, con el fin de facilitar o hacer posible su aplicación práctica; normas que reciben el nombre de **decretos Reglamentarios**.

Respeto del poder reglamentario esta corporación en anteriores oportunidades ha sostenido que “... si bien el poder reglamentario está implícito en la necesidad y la obligación del gobierno de hacer cumplir las leyes, como antes se anotó, su legitimidad deriva siempre de la ley reglamentada en donde encuentra sus límites naturales sin que pueda el presidente de la República pretender sustituir la ley, para buscar una aplicación conveniente a través de reglamento. En manera alguna la constitución le otorgo al presidente de la República la función de “arreglar la ley” para modificar, limitar o extender su contenido a situaciones no previstas en ella o para hacer producir efectos distintos a los en ella señalados; pues la atribución de dictar la ley, o de modificar la preexistente, es labor legislativa que en tiempo de paz solo compete al congreso de la república como órgano legislativo, según lo indica la constitución política en su artículo 150...”

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que mal podía el tribunal dar aplicación a la modificación de la prescripción establecida en el Decreto 4433 de 2004, **cuando el presidente de la república, so pretexto de reglamentar la ley, excedió los términos de la misma, es decir cuando la legitimidad del Decreto se deriva de la ley que reglamentaba, Razón por la cual es claro que debe seguir dándosele aplicación al Decreto ley 1212 del 8 de junio de 1990, mediante el cual el presidente de la república de Colombia en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la ley 66 de 1989, reforma el estatuto del personal y suboficial de la policía,**

Señor Juez, como se desprende de la anterior jurisprudencia emitida por el órgano de cierre de la Jurisdicción Administrativa el artículo 43 del Decreto 4433 no es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, por las razones expuestas en el fallo que se transcribe.

VII. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGAN LA RELIQUIDACION DE PRESTACIONES PERIODICAS NO TIENEN CADUCIDAD

Señor Juez, de conformidad con el artículo 164 numeral 1° del CPACA, los actos administrativos que reconocen, así como los que niegan el reconocimiento de prestaciones periódicas, llámese pensiones o reliquidación de las mismas, pueden ser demandados en cualquier tiempo, es decir *no opera el fenómeno de la caducidad*.

El Órgano de Cierre de la Jurisdicción Administrativa, el H. Consejo de Estado en sentencia proferida el 2 de octubre del 2008, Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN N° de radicado 6050-2002, actor María Araminta Muñoz de Luque, demandada Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, hizo una **"RECTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL"** acerca de la interpretación del artículo 136 numeral 2° del C.C.A. acerca de la caducidad de los actos administrativos, fijando la siguiente interpretación:

3. RECTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL.

"Con este pensamiento, la premisa que la Sala sienta, se distancia de la interpretación que ha sostenido la Sección en las referencias jurisprudenciales anotadas homogéneamente en los últimos años; por consiguiente, la excepción de caducidad respecto de los actos que reconozcan prestaciones periódicas, se aplica indiscutiblemente también a los actos que las niegan, para lo cual se invocan además las siguientes razones (negrilla y subrayado es nuestro).

(...)

2- El artículo 48 de la Constitución Política, habilita el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social, y en esa misma dimensión el artículo 46 ibídem, constitucionaliza el amparo prevalente frente a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. Estos dos preceptos constitucionales que suponen protección frente a situaciones de necesidad, resultarían completamente ineficaces a la interpretación consolidada que no exime de caducidad a los actos que niegan prestaciones periódicas, y teniendo en consideración que los mandatos constitucionales suponen principios para la protección de derechos fundamentales, es evidente para esta Sala que el alcance regulador del numeral 2 del artículo 136 del C.C.A., debe ser reinterpretado en el sentido de exonerar del término de caducidad a los actos que niegan prestaciones periódicas. (Negrilla y subrayado es nuestro)

(...)

En suma, la relectura y alcance que en esta oportunidad fija la Sala al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto dispone que los actos que reconocen prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo, no asienta sólo a aquéllos que literalmente tienen ese carácter, sino que igualmente comprende a los que las niegan. La norma no los excluye sino que el entendimiento en ese sentido ha sido el resultado de una interpretación restringida, y tratándose de actos que niegan el reconocimiento de prestaciones periódicas, tales como pensiones o reliquidación de las mismas, para sus titulares que son personas de la tercera edad, se traduce en reclamaciones y controversias que envuelven derechos fundamentales. No puede perderse de vista que la Carta Política garantiza la primacía de los derechos inalienables, y éstos prevalecen sobre aspectos procesales. El derecho a la pensión y su reliquidación es un bien imprescriptible e irrenunciable para sus titulares. (Negrilla y subrayado es nuestro)

7. FALSA MOTIVACIÓN ARTÍCULO 137 DEL CPACA.

La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, en la motivación del acto administrativo que se demanda, incurrió en causal de **FALSA MOTIVACION**, al no existir correspondencia entre la decisión adoptada y los motivos de hecho y de derecho que se aducen para negar a mi poderdante las peticiones solicitadas lo que es motivo de nulidad (Art. 137 CPACA.); además quebrantó las disposiciones de jerarquía superior normativa.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, han entendido que existe la ilegalidad denominada **FALSA MOTIVACION**, cuando los fundamentos alegados por el funcionario que expidió el acto administrativo, en realidad no hayan existido, o no tengan el carácter jurídico que el legislador les ha dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos, de una parte o que los motivos, no sean de tal naturaleza que justifiquen la medida tomada.

Se denominan **motivos**, según la doctrina francesa, las circunstancias de hecho que proceden o provocan toda decisión administrativa; la sucesión de acontecimientos que impulsan al administrador público a obrar; la decisión en tales circunstancias será ilegal, si no se justifican las razones que la provocaron; obviamente la causal de la falsa motivación encuadra dentro de la violación de la ley general.

Con base en lo anterior, me permito proceder a explicar los motivos por los cuales **LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES** incurrió en el vicio de la FALSA MOTIVACION, cuando negó los derechos reclamados.

En el acto administrativo demandado, la Caja soporta su argumentación para negar los derechos reclamados por mi poderdante, en las siguientes razones:

1º- La existencia de un régimen especial para los miembros de la Fuerza Pública.

Al respecto es necesario aclararle a esa Caja, que contrario a su argumentación, la Honorable Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha sentado doctrina, de que los regímenes especiales **se ajustan a la constitución** cuando contemplan iguales o superiores prestaciones que los que se contemplan en el régimen general. Con ponencia del Honorable Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA, en la sentencia C- 182 en cuanto al tema que nos ocupa, sentó la siguiente jurisprudencia:

(...)

“Ha señalado esta Corporación en relación con el establecimiento de los llamados “Regímenes Excepcionales”, que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones prestacionales más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitativo frente al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, estas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad”. (El subrayado y negrilla es nuestro)

Es de resaltar que la petición no busca la aplicación de aspectos favorables del régimen general, sino la observancia de la Constitución, en cuanto al derecho fundamental de protección a la vida digna, especialmente a las personas de la tercera edad, observando el mandato superior de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Igualmente el legislador al expedir la Ley 238 de 1995, adiciono el régimen especial de la Fuerza Pública el artículo 14 de la Ley 100, tal como se hace con el artículo 142 de la citada norma, toda vez que a los pensionados de la Fuerza Pública se les cancela la mesada 14 ordenada por la Ley 100/93 sin que esto constituya una violación al régimen especial al que aduce la caja demandada.

Por la existencia de un régimen especial para la Fuerza Pública, es lo que llevo legislador a expedir una norma con fuerza de ley que adicionara esta normatividad con los postulados establecidos en la nueva constitución y en el régimen general de pensiones. La ley 923 de 1995 incorporo al régimen de pensiones de la Fuerza Pública los benéficos y derechos establecidos en los artículos 14 y 142 de la ley 100 de 1993: la mesada 14 y el mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y pensiones. Si no es así cual fue el objeto de la expedición de la citada norma.

2º.- Principio de oscilación. También la Caja fundamenta su negativa, en el principio de oscilación establecido en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, que establece que las asignaciones de retiro y las pensiones se liquidaran tomado en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para oficiales y suboficiales.

Esta debidamente sustentado a lo largo de la presente demanda, que el principio de oscilación es constitucionalmente aplicable en la liquidación de las asignaciones de retiro, en la medida que no quebrante la norma superior, del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, es decir, que el porcentaje a incrementar anualmente, sea igual o superior al del IPC del año anterior.

Contrario a lo afirmado por la Caja demandada, el artículo 169 del Decreto 1211, por ella citada, deja abierta la posibilidad para que normas de carácter general puedan ser aplicadas a los miembros de las FFMM., cuando expresamente se disponga.

Lo que dispone la norma es: Art. 169 D. 1211/90 . . . "Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, **a menos que así lo disponga expresamente la Ley**".

Efectivamente la Ley 100 de 1993 en su artículo 279, concordante con el artículo 1º de la ley 238 de 1995, extiende los "derechos y Beneficios" establecidos en el artículo 14 y 142 para los pensionados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en forma expresa está indicando que el contenido de los artículos 142 y 14 son aplicables a los pensionados de la Fuerza Pública.

Por lo anterior la mesada catorce, dispuesta en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 se ha venido cancelando por parte de la Caja de Retiro a los pensionados de la Policía Nacional sin ninguna objeción, no así ha sucedido con lo dispuesto en el artículo 14 de la citada norma (IPC),

También desconoce la Caja que la Ley 923 de 2004 en su numeral 2-4 establece como principio del sistema de pensiones de la Fuerza Pública, **"el mantenimiento de las asignaciones de retiro y de las pensiones"**

Incurre en el vicio de falsa motivación LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES cuando se pretende darle una interpretación acomodada al principio de oscilación establecido en el decreto 1211 de 1990 para negar las peticiones

presentadas por mi apoderado en el derecho de petición, desconociendo el mandato superior.

Incurrir en FALSA MOTIVACIÓN, como ocurrió en el caso *sub examine*, normalmente se presenta por la aplicación incorrecta de los métodos de interpretación normativa; en esta demanda he podido dejar muy claros los postulados normativos y de interpretación jurisprudencial y doctrinario respecto de los mínimos porcentajes en que debe incrementarse anualmente la pensión de mi poderdante, erróneamente interpretado por la Demandada.

Con lo anterior, queda claro que la Caja demandada, para negar las pretensiones de mi poderdante, ha hecho una incorrecta interpretación de la ley 4º/92 y de los decretos anuales de aumento salarial, toda vez que estas normas no versan en materia pensional; esto hace que exista nulidad del acto demandado por falsa motivación, por mutación de la verdad e incorrecta interpretación normativa.

Considerar como lo hace la Caja, que la asignación de retiro es una forma especial de salario, es desconocer los fundamentos propios del régimen de pensiones. Si fuera salario, cuando un miembro de la Fuerza Pública se retira le debieran de seguir pagando lo que venía percibiendo en actividad y se mantendría la relación laboral, dando derecho a percibir todas las prestaciones sociales, pero eso no es así: cuando mi poderdante se retiro del servicio activo se le realizó una liquidación, aplicando unos factores establecidos en la ley de acuerdo al tiempo de servicio.

Señor juez, del estudio de los argumentos invocados en la presente demanda, permiten concluir que Constitución, (Art. 13, 46,48 y 53), y Ley (100/93, 238/95 y 923/04) Jurisprudencia (Sentencias C- 862 del 9/10/06, C- 432/05/04, 251/03/04, 461/95, 182/97, 941/03, 067/99, 387/94, 168/95 y 188/99) han previsto la naturaleza jurídica y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y asignaciones de retiro de la Fuerza Pública y la protección especial al adulto mayor. No se entiende, porqué la Caja demandada no ha dado estricto cumplimiento a esta obligación, en abierta contradicción con la constitución de 1991, toda vez que la inobservancia por parte de un funcionario público de las obligaciones constitucionales y legales que le corresponden al Estado está poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho pilar de la actual normatividad.

VIII. COMPETENCIA

El Circuito Judicial Administrativo **DEL VALLE DEL CAUCA**, es competente para conocer de este asunto en primera instancia por la cuantía y naturaleza del asunto y por factor territorial por cuanto el señor SM **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**, tuvo como último lugar de trabajo en **BATALLON DE ARTILLERIA NO. 3 PALACE** con sede la ciudad DE BUGA, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, 156 Y 157 del CPACA, y artículo 20 del CPC.

IX. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

De conformidad con el artículo **157** del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo la cuantía de la demanda se estima por valor de **DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$18.053.366), sin indexación**; esta cuantía resulta de las diferencias que resultan entre la mesada pagada y la debido pagar en los **últimos**

tres años luego de realizar un análisis comparativo de la mesada pensional recibida por el demandante en cada uno de los años, comparándola con la que debió de recibir, motivo de litigio; si la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES , hubiera tenido en cuenta para realizar el aumento anual de la pensión de mi poderdante, el mayor porcentaje entre el incremento de las asignaciones básicas del personal en servicio activo o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, aplicable al incremento de las pensiones del régimen general, tal como lo estipula el artículo 14 de la Ley 100.

La diferencia existente entre la mesada pagada y la mesada que se ha debido pagar, se multiplica por catorce (14), que es el numero de mesadas anuales a que tiene derecho mi poderdante, resultado que arroja el monto anual dejado de pagar y la sumatoria año por año, nos da la cuantía materia de esta demanda.

Con el fin de ilustrar en mejor forma al Juzgado, a continuación se presenta el cuadro demostrativo de este análisis:

AÑO	INCREMENTO RECIBIDO	IPC AÑO ANTERIOR	% DIFERENCIA	MESADA PAGADA	MESADA ESPERADA	DIFERENCIA A DEUDADA	MESADAS	ACUMULADO ANUAL	MESADA SA COBRAR	ESTIMACION DE LA CUANTIA
1996				809.239						
1997	17,49%	21,63%	-4,14%	950.781	984.277	33.496	14	468.944	0	-
1998	23,89%	17,68%	6,21%	1.177.960	1.219.460	41.500	14	580.993	0	-
1999	14,91%	16,70%	-1,79%	1.353.596	1.423.109	69.513	14	973.183	0	-
2000	9,23%	9,23%	0,00%	1.478.535	1.554.465	75.929	14	1.063.009	0	-
2001	5,66%	8,75%	-3,09%	1.562.220	1.690.480	128.260	14	1.795.637	0	-
2002	4,97%	7,65%	-2,68%	1.639.866	1.819.802	179.936	14	2.519.105	0	-
2003	6,07%	6,99%	-0,92%	1.739.403	1.947.006	207.604	14	2.906.451	0	-
2004	5,28%	6,49%	-1,21%	1.831.243	2.073.367	242.124	14	3.389.734	0	-
2005	5,50%	5,50%	0,00%	1.931.961	2.187.402	255.441	14	3.576.170	0	-
2006	5,00%	4,85%	0,15%	2.028.559	2.296.772	268.213	14	3.754.978	0	-
2007	4,50%	4,48%	0,02%	2.119.845	2.400.127	280.282	14	3.923.952	0	-
2008	5,69%	5,69%	0,00%	2.240.464	2.536.694	296.230	14	4.147.225	14	4.147.225
2009	7,67%	7,67%	0,00%	2.412.307	2.731.259	318.951	14	4.465.317	14	4.465.317
2010	3,64%	3,64%	0,00%	2.500.115	2.830.676	330.561	14	4.627.855	14	4.627.855
2011	4,00%	4,00%	0,00%	2.600.120	2.943.903	343.783	14	4.812.969	14	4.812.969
TOTAL								43.005.523		18.053.366

- **En la primera columna:** Relación de los años materia de la presenten reclamación.
- **Segunda columna:** Porcentaje aumentado a la asignación de retiro de mi poderdante en el respectivo año o incremento recibido.
- **Tercera columna:** Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el DANE y aplicado en el aumento de las pensiones para los años reclamados.
- **Cuarta columna:** Diferencia entre el porcentaje de aumento anual aplicado a la asignación de retiro de mi poderdante y el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- **Quinta columna:** Mesada mensual en pesos cancelada a mi poderdante en el respectivo año.
- **Sexta columna:** Monto mensual en pesos que debió cancelar la Caja de Sueldos, a mi poderdante si hubiera aplicado el IPC del año anterior para realizar el aumento.

- **Séptima columna:** Diferencia mensual en pesos entre la mesada pagada y la mesada que debió recibir mi poderdante con la aplicación del IPC, o diferencia adeudada.
- **Octava columna:** Número de mesadas recibidas en el respectivo año.
- **Novena columna:** Consolidado los valores anuales dejados de cancelar que resulta de multiplicar la diferencia mensual entre las mesadas, por el número de mesadas recibidas al año (14) En la última casilla de esta columna esta la sumatoria de los diferentes años que nos da la cuantía a reclamar.
- **Decima:** Número de mesadas a tener en cuenta para la estimación razonable de la cuantía.
- **Decima Primera:** Estimación razonable de la cuantía de conformidad con el artículo 157 del CPACA.

X. PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito que se tengan como pruebas, la documentación aportada con la demanda.

1. Poder legalmente conferido para actuar en vía contenciosa.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor SM **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**.
3. Memorial contentivo del derecho de petición elevado ante la entidad demandada radicado número N° 72751 del 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
4. Oficio N° 47324 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, emitido por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES en respuesta del Derecho de Petición motivo de esta litis, con el cual se agotó la vía gubernativa.
5. Extracto hoja de servicios del señor SM **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**.
6. Copia auténtica de la Resolución N° 1402 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 1987, mediante la cual se le reconoce la asignación de retiro al señor SM **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**.
7. Certificación N° 61457 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 expedida por CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES donde certifica el sitio geográfico o última unidad del señor SM **GUSTAVO TORRES BETANCOURT**.
8. Solicito respetuosamente a ese despacho que en el evento de faltar alguna **constancia, certificación o notificación** que se considere necesaria para el estudio de la presente demanda, se ordene a la demandada allegarlos en su oportunidad.
9. Igualmente si el Juzgado considera necesario, solicito oficiar al DANE para que remita las certificaciones de las variaciones del IPC que se han dado a partir de 1996 hasta la fecha.
10. Copias de la demanda con sus respectivos anexos para: Archivo, Agencia nacional de Defensa Jurídica del Estado, Traslado a la entidad demandada y una para el Ministerio Público.

XI. NOTIFICACIONES

DEMANDADA: Al señor Director de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL) en la carrera 10° N° 27 – 27 Int. 137 de la ciudad de Bogotá DC. email.: notificacionesjudiciales@cremil.gov.co

DEMANDANTE: Mi poderdante SM. **GUSTAVO TORRES BETANCOURT** las recibirá en la CALLE 71 B NO. 93-34, de la ciudad de BOGOTÁ.

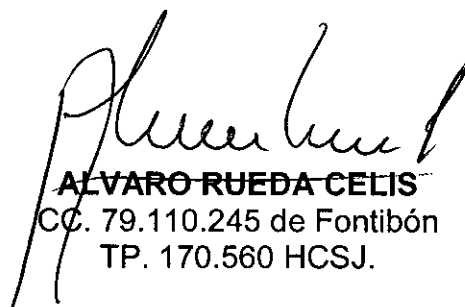
MINISTERIO PÚBLICO: El señor Procurador delegado ante ese Honorable despacho, puede ser notificado en la secretaría de esa Corporación o en la Carrera. 5 No. 19 -34 Oficina 702 de la ciudad de Bogotá.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, las recibirá en la calle 70 No. 4-60 int 312, teléfono: 2558957 ext 303 – 305 de la ciudad de Bogotá., email; buzonjudicial@defensajuridica.gov.co

EL SUSCRITO APODERADO: Las recibiré en la secretaría de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la calle 73 bis N° 26 – 28 barrio Los Alcázares de la ciudad de Bogotá, teléfono 7420825.

De conformidad con el artículo 205 de la Ley 1437 de Enero 18 de 2011, acepto que las notificaciones del presente proceso se hagan a través de mi correo electrónico: alvarorueda@arcabogados.com.co

Del Señor Juez,



ALVARO RUEDA CELIS
CC. 79.110.245 de Fontibón
TP. 170.560 HCSJ.